



**GUADALAJARA, JALISCO, A NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.**

**V I S T O S** para resolver en **sentencia definitiva** los autos del juicio administrativo con número de expediente indicado al rubro superior derecho, promovido por [REDACTED], en contra de la **SECRETARÍA DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO, DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO** y la **DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN.**

**R E S U L T A N D O**

**1.** Mediante escrito presentado en esta Primera Sala Unitaria el trece de agosto de dos mil veinte, [REDACTED], interpuso demanda en la vía contenciosa administrativa, en contra de las autoridades que se citan en el párrafo que antecede, teniéndose como actos impugnados: las infracciones foliadas con los números: **322276630** y **274025948**, atribuidas a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad del Estado, las infracciones foliadas con los números: **20162019388**, **20174002236**, **20183907399** y **20204520448**, imputadas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y la infracción foliada con el número: **2300801201956097**, imputada a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco; así mismo, se tuvo al accionante solicitando que de llegar a declararse la nulidad de los actos controvertidos, se ordene la **devolución** de lo que enteró con motivo de los mismos, ello mediante el recibo oficial número: [REDACTED], expedido por la Secretaría de la Planeación, Administración y Finanzas del Estado; demanda que se admitió por auto de veinte de agosto de dos mil veinte.

**2.** En el mismo acuerdo se admitieron las pruebas ofrecidas, las cuales se tuvieron por desahogadas por así permitirlo su naturaleza, y se ordenó emplazar a las enjuiciadas corriéndoles traslado con las copias simples del escrito de demanda y sus anexos, para que produjeran contestación a la misma, apercibidas de las consecuencias legales de no hacerlo, así mismo, se les requirió para que al momento de dar contestación a la demanda exhibieran copias certificadas de los actos que les fueron atribuidos, bajo el apercibimiento legal en caso de no hacerlo.

**3.** Por proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se hizo constar que ninguna de las enjuiciadas remitió copias certificadas de los actos que les fueron atribuidos, por lo que se tuvieron por ciertos los hechos que el actor les imputo en su escrito de demanda, por otro lado, se tuvo a las autoridades demandadas la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Transporte del Estado contestando a la demanda y por admitidas las pruebas que exhibieron, las cuales se tuvieron por desahogadas dada su propia naturaleza.

**4.** Con fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, se advirtió que no existía ninguna prueba pendiente por desahogar, por lo que se concedió a las partes el término legal para que formularan por escrito sus alegatos, sin que ninguna lo hiciera, razón por la cual se ordenó traer los autos a la vista para dictar la sentencia definitiva correspondiente.

**C O N S I D E R A N D O**

**I.** Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco es competente para conocer y resolver la presente controversia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 4 y 10 de la Ley Orgánica de este Tribunal.

**II.** La existencia de los conceptos controvertidos se encuentra debidamente acreditada con el recibo oficial con número de [REDACTED] de fecha quince de julio de dos mil veinte, expedidos por la Secretaría de la Hacienda Pública de la entidad, mismos que obra en la impresión agregado a fojas 12 a 15 de actuaciones, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los numerales 399 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación



supletoria a la Ley de la materia y 58 primer párrafo de la Ley de Justicia Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, lo anterior por tratarse de instrumentos públicos.

**III.** El interés jurídico del accionante, quedó colmado con los Recibos Oficiales señalados con antelación, en el cual se desprenden el número de placas vehiculares, y se señala al demandante como contribuyente y sujeto obligado con relación a dicho automotor, lo que implica que es quien se encuentra inscrito en el Padrón Vehicular del Estado de Jalisco como propietario del automotor sobre el que recaen las infracciones controvertidas.

**IV.** El Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado y el Secretario de Transporte del Estado, argumentaron que no les reviste la calidad de autoridades demandadas respecto de todas las infracciones controvertidas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3, fracción II, inciso a) de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Resulta infundada dicha causal de improcedencia, ya que no existe precepto legal alguno en la Ley de la materia que estatuya que el juicio debe sobreseerse si la autoridad llamada al mismo no es la que emitió u ordenó la ejecución de los actos que se impugnan; si bien, ello implicaría un problema procesal, en el que tendría que llamarse a la autoridad que los emitió, ordenó o ejecutó, pero nunca sobreseer por tal situación, y en el caso que nos ocupa se tuvo como autoridades demandadas a ambas secretarías porque del Adeudo Vehicular que la parte actora anexo a su demanda se desprende que dichos actos se emitieron antes y después de la reforma de los numerales 189 y 198 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, efectuada mediante el Decreto 27342/LXII/19 expedido por el Congreso del Estado de Jalisco y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día tres de octubre de dos mil diecinueve, por lo que la emisión de las infracciones controvertidas antes de dicha reforma correspondía a la Secretaría de Transporte del Estado y después de la misma, a la Secretaría de Seguridad del Estado.

**V.** Al no existir otras cuestiones de previo y especial pronunciamiento, se procede al estudio de aquellos conceptos de impugnación que de resultar fundados llevarían a esta Sala Unitaria a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados por el demandante en términos de lo dispuesto por el arábigo 72 de la ley de la materia.

Es aplicable por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número I.4o.A. J/44<sup>1</sup>, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala:

**"SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR.** En el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, **iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana**, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos."

**VI.** En ese sentido, este Juzgador analiza el planteamiento del accionante, consistente en la negativa lisa y llana de conocer el contenido de los actos impugnados, ya que se enteró de su existencia el quince de julio de dos mil veinte, al momento de acudir a las instalaciones de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, en virtud de que no le fueron debidamente notificadas.

<sup>1</sup> Publicada en la página 1646 del tomo XXIII de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil seis, registro número 174974.



Se considera que asiste la razón al demandante, ya que al negar **lisa y llanamente** conocer los documentos en que constan los mismos, la carga de la prueba sobre la legal existencia por escrito correspondía a las autoridades demandadas a quienes les fueron imputados, tal y como lo establecen los numerales 286 y 287 fracción I del Código Procesal Civil del Estado de aplicación supletoria a la ley de la materia, a saber:

**“Artículo 286.-** El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado los de sus excepciones...”

**“Artículo 287.-** El que niega sólo está obligado a probar:

**I.** Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho...”

Entonces, al ser la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, Secretaría de Seguridad del Estado, la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, y la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, a quien el demandante imputó los citados actos, debieron acreditar en este juicio su emisión conforme a los requisitos de legalidad contenidos en el numeral 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, así como su constancia de notificación y en ese tópico permitir al promovente que ampliara su demanda al respecto. Pero no lo hicieron así, de ahí que no colmaron con su carga probatoria, al no demostrar si los mismos cumplían con los requisitos de validez. A mayor abundamiento, se considera importante resaltar que los actos administrativos, por regla general, se presumen legales, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 14 y 19 de la Ley del Procedimiento Administrativo, 27 de la Ley de Hacienda Municipal y 20 del Código Fiscal, todos del Estado de Jalisco; pero lo anterior tiene una excepción, estatuida en los mismos ordinales: cuando el gobernado **niega lisa y llanamente** conocer los actos, sin que la negativa implique la afirmación de otro hecho las autoridades son las que tienen la carga de la prueba, como ocurrió en la especie, caso en el que, como no puede demostrarse un hecho o acontecimiento negativo, la obligación de demostrar si los actos son legales se revierte hacia las autoridades, las cuales deben exponerlo, lo que en este caso omitieron las enjuiciadas, además de que no allegaron al presente juicio los actos controvertidos como se aprecia de constancias, de ahí que no desvirtuaron la negativa formulada por el demandante al respecto.

Así, la omisión procesal referida, provoca que la parte actora quede en estado de indefensión al no poder conocer los pormenores y circunstancias contenidas en los actos controvertidos, ya que no puede verificar si se sitúa dentro de los supuestos legales de infracción que señalaron las autoridades emisoras en ellos y conocer el por qué tenía que pagar el concepto de gastos de ejecución que controvierte; además de que resulta evidente que la parte actora no puede ejercer su derecho de audiencia y defensa en contra de las actuaciones que le fueron imputadas, toda vez que nunca se le dieron a conocer.

En consecuencia, debe considerarse que las autoridades enjuiciadas en el caso que nos ocupa, no cumplieron con la obligación procesal de que se trata, al no desvirtuar la negativa del actor, relativa a que no conocía las sanciones impuestas en los actos descritos con anterioridad, por consiguiente, por consiguiente se debe declarar la nulidad de las mismas, al no poderse verificar si los documentos impugnados cumplían o no con lo dispuesto en los ordinales 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; considerándose que en la especie se actualiza la causal de anulación prevista por los preceptos 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, **siendo procedente declarar la nulidad lisa y llana de las infracciones foliadas con los números: 322276630 y 274025948, atribuidas a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad del Estado, las infracciones foliadas con los números: 20162019388, 20174002236, 20183907399 y 20204520448, imputadas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y la infracción foliada con el número: 2300801201956097, imputada a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado.**

Apoya lo sentenciado la jurisprudencia número 2a./J. 209/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 188/2007-SS bajo la voz:



**“JUICIO DE NULIDAD. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR CONSTANCIA DE ÉSTE Y DE SU NOTIFICACIÓN.”** Si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación contiene el principio de presunción de legalidad de los actos y las resoluciones de las autoridades fiscales, también lo es que el propio precepto establece la excepción consistente en que la autoridad debe probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente. De ahí que el artículo 209 bis, fracción II, del indicado Código, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005 (cuyo contenido sustancial reproduce el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) disponga que, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo niegue conocer el acto administrativo impugnado, porque no le fue notificado o lo fue ilegalmente, así lo debe expresar en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye el acto, su notificación o su ejecución, lo que genera la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de exhibir al contestar la demanda, constancia del acto administrativo de que se trate y de su notificación, para que el actor tenga oportunidad de combatirlos en la ampliación de la demanda. Lo anterior, porque al establecerse tal obligación para la autoridad administrativa, el legislador previó la existencia de un derecho a favor del contribuyente, a fin de que durante el procedimiento contencioso administrativo se respete su garantía de audiencia y, por ende, los principios de certidumbre y de Transporte jurídica de los que debe gozar, contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando así que quede sin defensa ante la imposibilidad legal de combatir actos autoritarios de molestia de los que argumenta no tener conocimiento, máxime que según lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar los artículos 207 y 210 del mismo ordenamiento fiscal, el Magistrado instructor, al acordar sobre la admisión del escrito por el que se contesta la demanda de nulidad, debe otorgar a la actora el plazo de 20 días para ampliarla, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión al proscribir su derecho a controvertir aquellas cuestiones que desconoce o que la demandada introduce en su contestación.”

También, es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 117/2011<sup>2</sup>, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 133/2011 que es del tenor siguiente:

**“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, NO ADMITE REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD.** Conforme a la construcción de precedentes iniciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 188/2007-SS y 326/2010, la regla del artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en una de sus partes, debe interpretarse en el sentido de que, frente al desconocimiento del acto administrativo impugnado por la actora, la obligación de la autoridad demandada de exhibir la constancia de su existencia y de su notificación debe cumplirse sólo en el momento de la contestación de la demanda, sin que sea admisible su requerimiento posterior por el Magistrado instructor. Lo anterior, por un lado, ante la ausencia de disposición normativa expresa que así lo establezca, resultando inaplicable el artículo 21, penúltimo párrafo, en relación con el diverso 15, penúltimo párrafo, del citado ordenamiento, que involucran el tratamiento general de la sustanciación del juicio de nulidad, ajena a la especialidad en que opera aquella regla y, por otro, en respeto a la garantía de audiencia y a los principios de economía e igualdad procesales, que serían incumplidos con una conclusión distinta.”

<sup>2</sup> Visible en la página 317 del tomo XXXIV de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil once, consultada por su voz en el IUS 2010



Igualmente cobra aplicación lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 173/2011 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro 3, Tomo 4, diciembre de dos mil once, página 2645, con número de registro 160591, de rubro:

**"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CUANDO NO SE ACREDITA EN EL JUICIO RESPECTIVO LA EXISTENCIA DE LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNADAS DEBE DECLARARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.** Ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que si en el juicio contencioso administrativo federal el actor manifiesta en su demanda desconocer el acto administrativo impugnado, es obligación de la autoridad demandada exhibir constancia de su existencia y de su notificación al momento de contestarla, con la finalidad de que aquél pueda controvertirlas a través de la ampliación correspondiente; por tanto, si la autoridad omite anexar los documentos respectivos en el momento procesal oportuno, es indudable que no se acredita su existencia, omisión que conlleva, por sí, la declaratoria de nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas por carecer de los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

**VII.** Por último, en virtud de que la parte actora realizó el pago de las citadas infracciones, como consta en la impresión del Recibo oficial número: [REDACTED] expedidos por la Secretaría de la Hacienda Pública de la entidad, **se ordena a la citada dependencia, como autoridad involucrada en el cumplimiento de este fallo**, le devuelva el importe enterado al respecto, de conformidad con el arábigo 76 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, como parte de la restitución a su derecho vulnerado con los actos nulificados.

A lo anterior encuentra aplicación por analogía la jurisprudencia número 1a./J. 57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 144, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Mayo de 2007, novena época, de rubro y texto siguiente:

**"AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO.** *Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica".*

Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 72, 73, 74 fracción II y 75 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es de resolverse conforme a los siguientes:

## RESOLUTIVOS

**PRIMERO.** Esta Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es competente para tramitar y resolver este juicio.

**SEGUNDO.** Resultó infundada la causal de improcedencia que hicieron valer El Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado y el Secretario de Transporte del Estado, en consecuencia, no es de sobreseer ni se sobresee el presente juicio.

**TERCERO.** La parte actora probó los hechos constitutivos de su acción, y las enjuiciadas no acreditaron sus excepciones, por lo tanto;



**CUARTO.** Se declara la nulidad lisa y llana de los actos consistentes en: las infracciones foliadas con los números: **322276630** y **274025948**, atribuidas a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad del Estado, las infracciones foliadas con los números: **20162019388**, **20174002236**, **20183907399** y **20204520448**, imputadas a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara y la infracción foliada con el número: **2300801201956097**, imputada a la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan, respecto del vehículo con placas de circulación [REDACTED] del Estado de Jalisco.

**QUINTO.** Se ordena a la **Secretaría de Transporte del Estado** y la **Secretaría de Seguridad del Estado**, efectúen la cancelación de las infracciones señaladas en el resolutivo que antecede, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberán realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**SEXTO.** Así mismo, se ordena a la **Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara**, efectúe la cancelación de la infracción descrita en el resolutivo cuarto, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**SÉPTIMO.** Se ordena a la **Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Zapopan**, efectúe la cancelación de la infracción descrita en el resolutivo cuarto, emitiendo el acuerdo correspondiente, además que deberá realizar las anotaciones respectivas en su base de datos, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**OCTAVO.** Finalmente, se ordena a la **Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco**, devuelva a la parte actora el importe que enteró con motivo de los mismos, es decir, la cantidad de \$ [REDACTED] (moneda nacional), tal y como se desprende del recibo oficial número: [REDACTED] y del comprobante de pago por internet con folio de pago número: [REDACTED], que obran agregados en autos a fojas 11 a 15, informando y acreditando todo ello a esta Primera Sala Unitaria.

**NOTIFÍQUESE MEDIANTE BOLETÍN ELECTRÓNICO A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS Y A LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, COMO AUTORIDAD INVOLUCRADA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE FALLO.**

Así lo resolvió el Magistrado **HORACIO LEÓN HERNÁNDEZ**, Presidente de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, actuando ante la Secretario Licenciada **MARIBEL QUIÑONEZ JIMÉNEZ**, quien autoriza y da fe.

HLH/MQJ/dmgm

*"La Sala o Ponencia que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente."*